



JUZGADO VEINTICINCO (25) LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Medellín, veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

Tipo de proceso	Consulta – Ordinario Laboral de Única Instancia
Demandante	JOSÉ HERIBERTO AGUIRRE RUÍZ
Demandado	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.
Juzgado de origen	JUZGADO QUINTO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE MEDELLÍN
Radicado	05001410500520180115601
Tema	Incrementos pensionales -Decreto 758 de 1990
SENTENCIA No.	19C 81G
Decisión/Temas	Confirma Sentencia

Procede el despacho a revisar en consulta la sentencia proferida dentro del proceso ordinario laboral de única instancia promovido por José Heriberto Aguirre Ruíz, en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.

I. ANTECEDENTES

1. Trámite de única instancia:

La parte accionante presentó demanda ordinaria laboral de única instancia en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones para que se condenara a la demandada al reconocimiento de incrementos pensionales del 14% sobre su pensión, por tener a cargo a su cónyuge, la señora MARÍA NICOLASA PULGARÍN DE AGUIRRE. Y se ordenara el pago de indexación y las costas del proceso.

Como sustento de sus pretensiones adujo que la demandada le recoció la pensión de vejez mediante Resolución 109073 del 23 de abril de 2018 sin hacer pronunciamiento alguno respecto a los incrementos pensionales por personas a cargo, por lo que procedió a solicitarlos y mediante comunicación BZ2018_6735028-1713914 le fueron negados. Que, contrajo matrimonio con la señora María Nicolasa Pulgarín de Aguirre



el 19 de marzo de 1977, con quien convive desde esa fecha y quien depende económicamente de él.

Luego de admitida la demanda por el juzgado se origen, se fijó fecha para la celebración de la diligencia del artículo 72 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ella se admitió la contestación a la demanda, se llevaron a cabo las etapas: obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación del litigio, decreto de pruebas; trámite y juzgamiento.

El 22 de septiembre de 2021, en la decisión que desató la Litis, el juzgado de origen declaró probada la excepción de inexistencia del pago de incrementos pensionales incoada por la demandada. Absolvió de todas las pretensiones invocadas en su contra, condenó en costas al demandante y ordenó la remisión del expediente para surtir el grado jurisdiccional de consulta.

2. Actuación procesal en el grado jurisdiccional de la consulta

Por reparto del 28 de septiembre de 2021 correspondió el presente asunto a este despacho judicial. Por auto del 8 de octubre de 2021 se admitió el grado jurisdiccional de consulta y mediante providencia del 15 de octubre de los corrientes se corrió traslado por el término de cinco (5) días a las partes para que presentaran alegatos de conclusión, conforme lo establecido por el artículo 15 del Decreto 806 de 2020; y a través de proveído del 8 de noviembre de la calenda se fijó fecha para la diligencia que nos ocupa.

3. Alegatos de las partes

La parte demandante presentó alegatos de conclusión indicando que causó el derecho al reconocimiento y pago de los incrementos pensionales en 2018 y que, si bien la Sentencia SU 140 de 2019 unificó criterios respecto a la vigencia de esta prestación, no es posible aplicar de forma retroactiva lo plasmado en dicha providencia.

Por su parte, Colpensiones alegó que el demandante no es beneficiario de los incrementos pensionales, pues en la Ley 100 de 1993 no quedaron consagrados expresamente los mismos. Y trajo a colación la sentencia SU 140 de 2019, en la cual la Corte Constitucional señaló que el régimen de transición conservó las condiciones pensionales de edad, tiempo y monto anteriores a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, pero no los incrementos pensionales, los cuales fueron derogados por esta normativa.

II. CONSIDERACIONES



1. Competencia

De conformidad con lo indicado en el artículo 69 del CPTSS, modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, y condicionado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-424 del 08 de Julio de 2015; este despacho es competente para revisar en consulta la sentencia de única instancia proferida en este proceso por el Juzgado Quinto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín.

2. Problema jurídico

Deberá establecerse si el reconocimiento de los incrementos pensionales por persona a cargo es procedente luego de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

3. Tesis del Despacho

De acuerdo con el artículo 7 del Código General del Proceso, los jueces, en sus providencias, están sometidos al imperio de la ley y la jurisprudencia de las altas cortes; pues esta última unifica criterios de aplicación del ordenamiento jurídico generando seguridad jurídica y confianza legítima en los usuarios de la administración de justicia.

Así mismo, sin importar el tiempo que transcurra entre la presentación de la demanda y la sentencia, en principio la decisión del juzgador debe ceñirse a las normas vigentes para el momento en el que se dieron los hechos en los que se fundan las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que los efectos jurídicos de la norma, no pueden producirse de manera retroactiva; pero sí de manera retrospectiva, entendiendo este fenómeno como la aplicación de una norma en situaciones no consolidadas antes de su vigencia. (Sentencia SU 309 de 2019)

Conforme al criterio establecido por la Corte Constitucional en Sentencia SU -140 de 2019, el Acuerdo 049 de 1990 aprobado mediante el Decreto 758 de ese mismo año, así como las disposiciones anteriores que contemplaban el derecho a los incrementos pensionales, fueron tácitamente derogadas en este aspecto con la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.

En consecuencia, la decisión que se revisa será confirmada, en cuanto absolvió a Colpensiones de todas las pretensiones de la demanda.

4. Presupuestos normativos

Los artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, que rezan:

“ARTÍCULO 21. INCREMENTOS DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ POR RIESGO COMUN Y VEJEZ. Las pensiones mensuales de invalidez y de vejez se incrementarán así: a) En un siete por ciento (7%) sobre la pensión mínima legal, por cada uno de los hijos o hijas menores de 16 años o de dieciocho (18) años si son estudiantes o por cada uno de los hijos inválidos no pensionados de cualquier edad, siempre que dependan económicamente del beneficiario y, b) En un catorce por ciento (14%) sobre la pensión mínima legal, por el cónyuge o compañero o compañera del beneficiario que dependa económicamente de éste y no disfrute de una pensión. Los incrementos mensuales de las pensiones de invalidez y de vejez por estos conceptos, no podrán exceder del cuarenta y dos por ciento (42%) de la pensión mínima legal”.

“ARTÍCULO 22. NATURALEZA DE LOS INCREMENTOS PENSIONALES. Los incrementos de que trata el artículo anterior no forman parte integrante de la pensión de invalidez o de vejez que reconoce el Instituto de Seguros Sociales y el derecho a ellos subsiste mientras perduren las causas que les dieron origen. El Director General del ISS establecerá los mecanismos necesarios para su control”.

La Ley 100 de 1993 en su artículo 36 consagró un régimen de transición en virtud del cual mantuvo las condiciones de edad, tiempo y monto contenidos en la legislación anterior; pero no se refirió a los incrementos pensionales por persona a cargo que estaban previstos en las normativas anteriores. De manera que se configuró en relación con este beneficio una derogatoria tácita con la entrada en vigencia del nuevo sistema general de pensiones.

En este mismo sentido se pronunció la Corte Constitucional en sentencia SU -140 de 2019, cuando sostuvo:

“(…)

3.2.1. *Dejando de lado la derogatoria expresa de las normas que previó el artículo 289 de la Ley 100 de 1993 (ver supra 3.1), para la Corte es claro que de la anterior enunciación de principios de articulación, organización y unificación normativa se desprende la derogación orgánica de todas las normas que integraban el régimen de seguridad social anterior a dicha ley. De hecho, inclusive limitando el análisis al referido principio de unificación, la doctrina especializada explica que este “tiene importantes consecuencias jurídicas, pues significa que desaparecen las regulaciones anteriores y se crea una nueva, en forma integral, sin perjuicio de lo que disponga el nuevo sistema respecto de los derechos adquiridos y los regímenes de transición normativa” (Énfasis fuera de texto).*

(…)

3.2.4. *Lo anterior debe ser suficiente para que la Corte concluya que los incrementos previstos en el artículo 21 del Decreto 758 de 1990 fueron orgánicamente derogados a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993. Ciertamente, ante la regulación integral y exhaustiva en materia pensional que hizo la Ley 100, no cabe sino concluir sobre la derogatoria orgánica del régimen anterior (ver supra 3.1.2.- 3.1.4.) dentro del cual cohabitaban los referidos incrementos.*

3.2.5. *Para la Corte es innegable entonces que el artículo 21 del Decreto 758 de 1990 no produce efecto alguno respecto de quienes hayan adquirido el derecho a pensión con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993; todo ello sin perjuicio de que, con arreglo al respeto que la Carta Política exige para los derechos adquiridos, quienes se hayan pensionado con anterioridad a la expedición de la Ley 100 y hayan en ese momento cumplido con los presupuestos de la norma, conserven el derecho de incremento pensional que se les llegó a reconocer y de que ya venían disfrutando, siempre y cuando mantengan las condiciones requeridas por el referido artículo 21.”*

De lo anterior se concluye que el derecho a percibir incrementos pensionales que previó el referido artículo 21 del Decreto 758 de 1990, dejó de existir a partir del 1º de abril de 1994 cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993, considerando que se trata además de reconocimientos contrarios a la Acto Legislativo 01 de 2005, que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política.

3. Caso concreto

En el asunto bajo estudio, la parte accionante pretende el reconocimiento de incrementos pensionales del 14% sobre la pensión mínima legal, por tener a cargo a su cónyuge, la señora María Nicolasa Pulgarín de Aguirre.

La parte demandante, en sus alegatos en sede de consulta, manifiesta que, si bien la Corte Constitucional unificó criterios respecto a la vigencia de los incrementos pensionales por personas a cargo, como el demandante causó el derecho a esta prerrogativa en 2018, fecha anterior a la decisión del alto Tribunal, le deben ser reconocidos los aumentos pretendidos.

Por su parte, Colpensiones indicó que con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 la prerrogativa pretendida fue derogada.

De la prueba documental allegada por las partes se advierte que dentro de un proceso tramitado ante el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín en el que se discutió si el señor Aguirre Ruíz era o no beneficiario del régimen de transición, se profirió sentencia el 19 de octubre de 2016, en la cual se condenó a la Administradora



Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES a reconocerle y pagarle al demandante la pensión de vejez desde el 29 de julio de 2016, es decir, que el demandante causó el derecho a la pensión con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Así mismo, se observa que la entidad accionada dio cumplimiento a la orden referida a través de la Resolución SUB109073 del 23 de abril de 2018.

De acuerdo con lo explicado en acápite anteriores de esta providencia, atendiendo a lo resuelto en la sentencia SU140 de 2019, los incrementos pensionales perdieron su vigencia cuando entró a regir la Ley 100 de 1993, por lo que con posterioridad a esta fecha, sólo mantienen ese beneficio quienes ya habían consolidado su derecho por cumplir en su integridad con los presupuestos fácticos que exigía la norma.

Lo anterior significa, que independientemente de que el señor Aguirre Ruíz adquiriera el estatus de pensionado antes de proferirse la providencia constitucional, para aquél momento ya no estaban vigentes los incrementos pensionales y por tanto nunca consolidó ese derecho tal y como lo expuso la Corte Constitucional en Sentencia SU 140 de 2019. Criterio que además es de obligatorio acatamiento por parte del operador judicial, al ser una providencia en la que se unifican posiciones de interpretación sobre la vigencia de la prerrogativa estudiada.

Se concluye entonces que no le asiste derecho al demandante a los aumentos pensionales que reclama, por lo cual se confirmará íntegramente la sentencia que se revisa en el grado jurisdiccional de CONSULTA.

Sin costas en esta oportunidad, toda vez que la decisión se revisa en virtud del grado jurisdiccional de consulta, en atención a lo dispuesto en el artículo 69 del C.P. del T. y de la S.S. y la sentencia C-424 de 2015.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTICINCO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR íntegramente la sentencia de única instancia proferida dentro del proceso promovido por **JOSÉ HERIBERTO AGUIRRE RUÍZ** en contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES**, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: SIN COSTAS en el grado jurisdiccional de consulta.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión conforme a lo indicado en el numeral 3° del literal d del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social,



atendiendo a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021, radicación No. 89628.

CUARTO: DEVOLVER el expediente al juzgado de origen para lo de su competencia

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



CATALINA RENDÓN LÓPEZ
JUEZ

Correos: notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co;
j05mpclmed@cendoj.ramajudicial.gov.co; mesa.jaramillo@hotmail.com;
mmaabogamde6@gmail.com

Firmado Por:

Catalina Rendon Lopez

Juez

Juzgado De Circuito

Laboral 25

Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12



Código de verificación:

5e4865a5d4c8488711758c6266de95a505e25d74f90c3b21532857f1ff00ad9d

Documento generado en 29/11/2021 06:38:05 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

